

Crisis Migratoria en la Frontera: Impacto de las Nuevas Políticas de Trump

Expertos y defensores de los derechos humanos situados en distintas zonas de la frontera entre México y Estados Unidos han señalado que, aunque hasta el momento, tras poco más de un mes del inicio del mandato de Donald Trump, no se ha observado una ola masiva de deportaciones, no hay certeza de que esta situación se mantenga estable.

Asimismo, advierten que las condiciones en la frontera podrían deteriorarse, no solo por un posible aumento en el número de personas deportadas, sino también por la reactivación del programa "Quédate en México". Esta medida, en su versión inicial, obligaba a los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica a permanecer en México mientras esperaban la resolución de sus casos en tribunales migratorios estadounidenses.

"Si las deportaciones aumentan, podríamos estar frente a una crisis humanitaria de gran escala en la frontera", asegura Óscar Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y especialista en antropología social en Matamoros, una ciudad fronteriza en Tamaulipas colindante con Texas.

El académico del Colef destaca que los refugios en la frontera, manejados en su mayoría por organizaciones religiosas, operan con recursos limitados, ya que dependen casi exclusivamente de donaciones y no cuentan con fondos suficientes para atender las crecientes necesidades de la población migrante.

Además, las administraciones municipales de las ciudades fronterizas, incluyendo grandes centros urbanos como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, carecen de los recursos financieros para asistir a una población migrante en expansión.

"No existe la capacidad para gestionar apoyo a los migrantes desde los gobiernos municipales, ni los fondos necesarios, ya que no hay partidas presupuestarias destinadas a ello. Solo si los gobiernos estatales o el Gobierno federal asignaran un presupuesto específico, se podría solventar esta situación", explica Hernández.

"Es imprescindible fortalecer el financiamiento de programas humanitarios y de derechos humanos", sostiene Karina Breceda, activista y directora de dos refugios para mujeres migrantes embarazadas en Ciudad Juárez y El Paso.

Breceda señala que, anteriormente, muchas organizaciones como la suya recibían apoyo financiero del Gobierno de EE. UU. a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, estos fondos fueron suspendidos tras la llegada de Trump a la presidencia.

Por otro lado, la activista alerta sobre la militarización de la frontera en ambos países, ya que el despliegue de la Guardia Nacional en México ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

"Pasan más tiempo expuestas en estas zonas y son más propensas a sufrir situaciones de explotación o ser blanco de organizaciones criminales", advierte Breceda, quien dirige los refugios The Stella Center en Ciudad Juárez y Casa Maris en El Paso, Texas.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en el primer mes del gobierno de Trump se detuvo a más de 20.000 personas con un estatus migratorio irregular. Esta cifra representa un incremento del 627% respecto a las 33.000 detenciones registradas en todo el año anterior durante la administración de Joe Biden.

El 17 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, desde el 20 de enero hasta esa fecha, Estados Unidos había deportado a México a 14.400 personas. De ellas, 11.379 eran mexicanas y 3.091 provenientes de otros países.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del refugio Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, indica que, a pesar de la llegada de Trump, los albergues para migrantes aún no han alcanzado su capacidad máxima.

Por ejemplo, en un refugio de Piedras Negras, que normalmente alberga entre 200 y 360 personas, actualmente solo hay alrededor de 40. En el refugio Casa del Migrante en Saltillo, donde habitualmente residen 160 personas al día, la cifra actual es de 40.

"No obstante, la llegada de migrantes a estas zonas continúa", afirma Xicoténcatl Carrasco.

Karina Breceda, cuyos refugios pueden alojar hasta 90 mujeres, confirma que las cifras han descendido drásticamente, pero enfatiza que esto no significa que la necesidad de migrar haya desaparecido.

"Las restricciones impuestas han aumentado significativamente. Es cierto que hay menos migrantes cruzando por El Paso, pero eso no significa que la necesidad de huir o buscar una mejor calidad de vida haya disminuido", remarca Breceda.

José María Ramos García, doctor en Ciencias Políticas y Sociología del Instituto Universitario Ortega y Gasset e investigador en el Colef en Tijuana, explica que no hay grandes concentraciones de migrantes en las ciudades fronterizas porque llevar a cabo deportaciones masivas no es un proceso sencillo para un gobierno.

"A corto plazo, incrementar de manera significativa las deportaciones resulta complicado debido a restricciones legales, desafíos logísticos y problemas de financiamiento", señala.

El académico también indica que muchas de las personas detenidas son deportadas inmediatamente en vuelos directos a Ciudad de México, al centro del país o a la frontera sur.

Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), el número de "encuentros" de agentes fronterizos con personas que cruzaron ilegalmente la frontera fue de 61.465 en enero del 2025. Esta cifra es considerablemente menor a los 176.195 registrados en enero del 2024.

Ramos García sostiene que la política de contención migratoria de Trump continuará con medidas como la presencia de militares en ambos lados de la frontera.

"Se estima que, de los cinco millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, al menos entre un 30% y 40% llevan más de una década viviendo en el país. Esto significa que, si son deportados a la frontera, muchos intentarán reingresar de manera clandestina en múltiples ocasiones", detalla el especialista.

Para el doctor Óscar Misael Hernández, del Colef, si en los próximos meses Trump refuerza las deportaciones hacia ciudades fronterizas en México y reactiva programas como "Quédate en México" o el Título 42 —que durante la pandemia de COVID-19 permitió deportaciones inmediatas—, el país latinoamericano podría enfrentar una nueva crisis humanitaria.

"Por un lado, el Estado mexicano no cuenta con los recursos financieros suficientes a nivel municipal o estatal para atender a esta población. Por otro lado, tampoco se ha mostrado una voluntad política clara para implementar medidas de apoyo que realmente hagan la diferencia", señala el investigador desde Matamoros.

Hernández explica que, desde finales del 2018, la migración en México se ha vuelto más compleja.

"No solo ha crecido en volumen, como lo vimos con las caravanas de migrantes centroamericanos, sino que también se ha organizado mejor", comenta el especialista.

El fenómeno también se ha diversificado, ya que ahora involucra a personas de Sudamérica, el Caribe e incluso África. Paralelamente, se ha observado una precarización extrema de los migrantes, lo que ha llevado a muchos a la indigencia debido a la falta de oportunidades laborales.

"Además, hemos visto brotes de xenofobia en algunas ciudades fronterizas", advierte Hernández. "Ese es el principal riesgo si los protocolos de protección a migrantes se reactivan sin un enfoque humanitario adecuado por parte de EE. UU. y México los asume", concluye el especialista.